



DEAJALO24 - 9639

Bogotá, D.C., 09 de julio de 2024

Señora Juez

Doctora

MARÍA DEL TRÁNSITO HIGUERA GUIO

JUEZ 62 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C. –

REFERENCIA: PROCESO No. 110013343062202400083-00
MEDIO: REPARACIÓN DIRECTA
CONTRA: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
ACTOR: JACINTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y OTROS

JAVIER FERNANDO RUGELES FONSECA, mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.372.166 de Bogotá, con Tarjeta Profesional de Abogado No. 143.937 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado de la Nación – Rama Judicial en el proceso de la referencia, según poder otorgado por el Director de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio de la función de representación judicial y extrajudicial que le fuera delegada por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial mediante Resolución No. 7195 de 13 de septiembre de 2021, y dentro del término legal, procedo a contestar la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas las declaraciones y condenas que sean contrarias a la Entidad que represento, toda vez que no existe razón de hecho o derecho sobre la cual el Estado deba resarcir daño alguno a terceros porque carece de fundamentos jurídicos tal como se demuestra a continuación.

Me ratifico en todas y cada una de las razones de hecho y derecho expuestas, tanto en esta contestación a los hechos de la demanda como en las razones de la defensa, solicitando se absuelva de todo cargo a la Entidad que represento, declarando las excepciones que de conformidad con el artículo 187 inciso 2 del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resultaren probadas.

El apoderado de la parte actora señala entre otras, las siguientes pretensiones:

La parte actora pretende que se declare administrativamente responsable a la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por cuenta del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que considera configurado con la pérdida del vehículo de placas XIB289, que fue objeto de embargo dentro del proceso con radicado No. 11001400304320140002900.

II. A LOS HECHOS

En cuanto a los hechos constitutivos de la demanda, me atengo a aquellos que estén probados, de conformidad con el artículo 166 del C.P.A.C.A. *“El demandante deberá aportar con la demanda todas las pruebas documentales que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso”*.

A la NACIÓN RAMA JUDICIAL le constan únicamente los hechos que tienen que ver con las actuaciones judiciales y a las actuaciones procesales que se adelantaron ante los Jueces dentro del proceso que se ha constituido, según el demandante, en la causa eficiente de su demanda, siempre y cuando se hubiere allegado copia de las actuaciones del proceso donde ello conste y pueda verificarse, de lo contrario debe ser objeto de prueba.

De tal manera nos constan los enunciados fácticos que hacen referencia a la actuación procesal dentro del proceso penal señalados en el acápite “hechos”, siempre y cuando se hubiere allegado copia de las providencias judiciales y audios donde ello conste, de lo contrario deberá ser objeto de prueba; si se allegaron en copia, a las luces del artículo 246 C.G.P. tendrían el mismo valor probatorio que sus originales.

Corresponde a los demandantes probar si esta parte procesal es responsable por el daño sufrido en razón al presunto defecto en la administración de justicia que causó la privación injusta de la libertad, si corresponde a otra entidad o si, por el contrario, media alguna eximente de responsabilidad.

1. Ante el Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, se adelantó el proceso ordinario No. 11001400304320140002900, promovido por el señor JACINTO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra DANOVER ANTONIO ARCE GUAPACHA, dentro del cual se ordenó el embargo del vehículo de placas XIB289.

2. Posteriormente el (12) de enero de 2016, se dictó sentencia en primera instancia, la cual declaró la nulidad absoluta del contrato celebrado entre las partes el (29) de noviembre de 2010.
3. En auto de fecha (12) de agosto de 2014, proferido por el Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, el despacho DISPUSO DECRETAR LA APREHENSIÓN y posterior secuestro del vehículo de placas XIB289.
4. El gerente del parqueadero STORAGE AND PARKING en fecha (30) septiembre de 2014, informa que el vehículo de placas XIB289, fue inmovilizado por la Policía Nacional y se encontraba a disposición en sus instalaciones.
5. El Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, ordena DECRETARSE diligencia de secuestro, comisionando a los Jueces Civiles Municipales de Descongestión, emitiendo el despacho comisorio No. 0004 de fecha (29) enero de 2015.
6. Mediante memorial radicado ante el Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, en fecha (7) junio de 2016, se le indica a este despacho que el vehículo fue sacado del parqueadero STORAGE AND PARKING, sin autorización alguna, que la RAMA JUDICIAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA por medio del Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, OMITIO, prestar cuidado al parqueadero delegado, para que se garantizara en su totalidad la aprehensión e inmovilización del vehicular, mientras suscita la medida sobre el mismo y re resolvía el proceso.
7. En auto de fecha (13) julio de 2017, el Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, oficia a la SIJIN para lograr la NUEVAMENTE la aprehensión y ordena poner a disposición de este despacho el vehículo.
8. En fecha (26) febrero de 2018, la Policía Nacional en la ciudad de Acacías Meta Vía Granada, incauta el vehículo y el día (27) de febrero de 2018, la Policía Nacional SIJIN, deja a disposición del parqueadero CASTILLA REAL GRUAS Y PARQUEADEROS mediante inventario No. 801 el vehículo, ubicado en la ciudad de Villavicencio.
9. Mediante despacho comisorio No. 18-172 emitido por el Juzgado (43) Civil Municipal de Bogotá, comisionando al Juzgado Civil Municipal de Villavicencio, para que sea este quien practique la diligencia de RESTITUCIÓN al señor JACINTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, del 50% del vehículo.
10. En audiencia de entrega de vehículo automotor el Juzgado (7) Civil Municipal de Villavicencio, el (10) de septiembre de 2018, se llevó a cabo la DILIGENCIA DE ENTREGA (RESTITUCIÓN) del 50% del vehículo que se encontraba ubicado en

el parqueadero CASTILLA REAL GRUAS Y PARQUEADEROS, sin embargo, ésta no se materializó por oposición de uno de los tenedores del vehículo.

11. El día (18) de marzo de 2022, no se llevó a cabo diligencia de entrega de la Tenencia del 50% del vehículo por parte del Juzgado (7) Civil Municipal de Villavicencio, en razón a que la juez comisionada no encontró el vehículo en ningún parqueadero, debido a que el mismo fue retirado de los patios sin autorización del juzgado de conocimiento y con complicidad de los administradores del parqueadero.

Alega el demandante que pese a que el Juzgado advirtió de la salida del vehículo del parqueadero sin autorización y compulsó copias para que se investigara penalmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no hizo nada por evitar la pérdida del carro.

Teniendo en consideración que el título de imputación en el presente caso sería el “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, se estima pertinente citar las normas relativas a la responsabilidad del Estado y en particular las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que consagran dicho título de imputación de responsabilidad, analizarlas frente a las consideraciones que sobre el punto ha enseñado la jurisprudencia y examinar si la parte demandada debe responder por los hechos alegados.

III. RAZONES DE LA DEFENSA

3.1 DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

Teniendo en consideración que el título de imputación alegado es el presunto “*defectuoso funcionamiento de la administración de justicia*”, se estima pertinente citar las normas relativas a la responsabilidad del Estado y en particular las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que consagran dicho título de imputación de responsabilidad, analizarlas frente a las consideraciones que sobre el punto ha enseñado la jurisprudencia y examinar si la parte demandada debe responder por los hechos alegados.

El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Se trata de una cláusula general de responsabilidad estatal, cuya estructuración se determina a partir del cumplimiento de dos (2) requisitos:

1. Existencia de un daño antijurídico.
2. Que éste sea imputable a la acción u omisión de una autoridad pública.

La noción de daño antijurídico fue definida por el Consejo de Estado, como aquella lesión patrimonial o extrapatrimonial, causada en forma lícita o ilícita, que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar.

Por su parte, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia - *Ley 270 de 1996*- reguló la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, por las acciones u omisiones que causen daños antijurídicos, a cuyo efecto determinó tres presupuestos:

- Error jurisdiccional (Art. 67)
- Privación injusta de la libertad (Art. 68).
- Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (Art. 69)

La parte actora funda la pretendida responsabilidad del Estado en una presunta falla en el servicio, sin embargo, para que pueda considerarse como una verdadera causa de perjuicio que comprometa la responsabilidad Estatal, *“no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración puede considerarse como “anormalmente deficiente”*. (Consejo de Estado, Sentencia de agosto 4 de 1994. Expediente 8487). Negrillas fuera del texto.

El Consejo de Estado, respecto al tema ha pronunciado de esta manera:

"Pero decir daño antijurídico no quiere significar que la noción de falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó.

En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falta del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume. En ambas hipótesis ese primer supuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las normas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falta o falla de la administración, pero que el que lo sufre no tenía por qué soportarlo, el acreedor, como es apenas evidente, deberá demostrar el daño y el por qué, pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo.

En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla en el servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender".

En el régimen de imputación subjetivo de responsabilidad denominado falla del servicio probada, la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos necesarios:

- i. El daño sufrido por el interesado;
- ii. La falla del servicio propiamente dicha, consistente en el mal funcionamiento del servicio porque éste no funcionó cuando debió hacerlo o, lo hizo tardía o equivocadamente y;
- iii. Una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.

Cabe resaltar igualmente que, en los juicios de responsabilidad patrimonial del Estado por las acciones u omisiones de la Rama Judicial, procede también el análisis de los llamados eximentes, o mejor excluyentes de imputación, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo del tercero y el hecho exclusivo de la víctima, como quiera que estos eventos integran esta institución jurídica y definen los elementos generales que la edifican.

Así, el H. Consejo de Estado lo ha precisado en abundantes providencias que cuando se demuestra que el daño provino de un evento constitutivo de fuerza mayor, hecho del tercero y el hecho de la víctima, la imputación no se configura y, por ende, no procede declarar la responsabilidad del Estado.

Respecto de esta modalidad de falla judicial ha señalado de manera reiterativa el Consejo de Estado que:

*"El artículo 69 de la ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia**. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.*

(...) El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. La doctrina

Española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó “... nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia , siempre y cuando la lesión se haya producido en el “giro o tráfico jurisdiccional ” entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado(excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño –incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado –si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado “giro o tráfico jurisdiccional ”, sino en otro tipo de actuaciones distintas. **En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”** Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, **“quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”**¹(Subrayas fuera del texto).

3.2. Del daño antijurídico

De otra parte, frente a los elementos para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado, y el concepto de daño jurídico, la H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-286/17, de fecha 03 de mayo de 2017, expediente D-11669, se pronunció así:

“Elementos para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado. Concepto de daño antijurídico

38. Ahora bien, según extensa doctrina y jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional, para que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado es necesaria la configuración de los siguientes **elementos**, a saber:

(a) Daño antijurídico

39. La noción de **daño antijurídico** a la que se refiere el artículo 90 Superior, es un concepto normativo parcialmente indeterminado, que no tiene una definición explícita en la Constitución ni en la ley. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha dado un contenido normativo particular a tal noción, mediante una interpretación sistemática e histórica^[109]. Así, se ha entendido que **el daño antijurídico es aquel perjuicio que le es generado a una persona y que ésta no tiene el deber jurídico de soportar**, razón por la cual, le corresponde una indemnización, como resultado de un reconocimiento dirigido a lograr la

¹ Consejero ponente, Dr. Ricardo Hoyos Duque. 22 de Noviembre de 2001. Radicación número 25000-23-26-000-1992-8304-01 (13164). Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña. Demandado: Nación – Ministerio de Justicia.

adecuada reparación de la víctima, y nunca bajo una óptica sancionatoria impuesta en contra del Estado o sus agentes^[110].

*Esta Corporación^[111] ha sostenido que para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, el daño: (i) ser cierto y personal y (ii) debe ser antijurídico. Se denomina daño **antijurídico**, no sólo porque la conducta del autor de la lesión sea contraria al Derecho, sino también porque el sujeto que sufre el daño, -esto es, el asociado, la persona o la víctima del Estado-, “no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio que se le ha infringido, creándose así una lesión injusta”^[112] que debe ser indemnizada.*

*40. La antijuricidad del daño, en consecuencia, ocurre, en principio, cuando la actuación del Estado no se encuentra justificada, bien sea porque (i) no existe un título jurídico válido que autorice o admita el daño causado, -caso en el que el Estado no está legitimado para producir la afectación correspondiente- (derivado de una actuación ilícita), o (ii) cuando el daño excede las cargas que normalmente un individuo en la sociedad está obligado a soportar^[113] (derivado tanto de actuaciones lícitas como ilícitas). De estos escenarios se deriva que existen algunos daños que los asociados sí están en la capacidad y obligación de soportar, por los cuales no responderá el Estado. En otras palabras, **no toda lesión o daño resulta antijurídico, ni debe ser reparado por el Estado.***

*Con todo, para determinar si un daño es o no antijurídico, deben revisarse en cada caso las circunstancias en las que se produjo el mismo, en especial, la existencia de causales de justificación para la Administración que admitan que la persona, en virtud de normas legales u otros factores, tiene el deber de soportar el daño que se le infringió, según corresponda. Como lo recuerda la **sentencia C-965 de 2003**^[114].*

“...cuando el daño no reviste el carácter de antijurídico, en razón a que recae sobre un interés que no goza de la tutela del derecho o que el sujeto pasivo tiene el deber jurídico de soportar en detrimento de su patrimonio, no se configura la responsabilidad del Estado y éste no se obliga a pagar una indemnización”.

De cualquier modo, la concepción general del daño antijurídico a partir del concepto de que éste se configura cuando quien lo sufre no estaba obligado a soportarlo, constituye entonces según esta Corporación^[115], otra forma de plantear el principio constitucional según el cual la actividad de la administración estatal debe respetar la igualdad frente a las cargas públicas impuestas por el Estado (art. 13 C.P.).

Esta idea se traduce, entre las causales de imputación, en el fundamento del “daño especial”, que resalta que la sociedad está obligada a indemnizar el daño excepcional o anormal ocurrido como consecuencia de la actividad lícita del Estado, cuando una actividad desplegada en interés de la colectividad puede lesionar sin más a sólo algunos individuos de esa colectividad, afectándose con ello el principio de equidad^[116].

(b) Que le sea imputable al Estado (imputabilidad)

*41. Aunque el daño antijurídico es un elemento sine qua non de la responsabilidad patrimonial del Estado, no es el único requisito para que se dé la obligación de reparación^[117]. En efecto, aún existiendo un daño antijurídico concreto, se debe acreditar la existencia de un vínculo jurídico entre el daño y la actividad pública desplegada, de manera tal que el mismo pueda ser **imputable al Estado**. Por lo que una consecuencia natural de la ausencia de dicha relación causal, es la imposibilidad jurídica de imputar al Estado y a sus agentes la realización del daño y el reconocimiento de una reparación o indemnización en favor de la víctima o perjudicado.*

*La imputación del daño al Estado es un aspecto jurídico, que no debe confundirse con su causación material^[118]. De acuerdo con el principio de imputabilidad, **la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado**, cuando exista además un título jurídico de atribución, “es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del Legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública, compromete al Estado con sus resultados”^[119].*

Como lo ha reforzado el Consejo de Estado, “la imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ‘título jurídico’ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ‘imputatio juris’ además de la imputatio facti”^[120].

(c) Producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad)

42. Ahora bien, para obtener la indemnización por un daño antijurídico propinado por el Estado se requeriría, además, que la lesión sea el resultado de la actividad regular o irregular de las obligaciones estatales o del incumplimiento de las mismas (omisión)^[121]. Es decir, así como pueden derivarse daños antijurídicos de una actividad ilícita por parte del Estado, también pueden provenir de una conducta legítima^[122]. En este segundo supuesto, la antijuridicidad del daño se da, como se explicó, porque el afectado no tiene la obligación de soportar esa carga.

En este punto ha de aclararse que, éste es el aspecto o elemento fáctico de la responsabilidad del Estado, pues está estrechamente relacionado con la verificación de que el daño se produzca realmente como consecuencia de la acción u omisión de una actividad o ente estatal. Así, se excluyen todos aquellos daños causados por terceros que no tengan relación con el Estado, por hechos producidos por la víctima (culpa exclusiva) o todos aquellos derivados de la fuerza mayor.

43. En suma, para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 constitucional es necesaria la comprobación de (a) un daño antijurídico, (b) que le sea imputable al Estado^[123] (causalidad jurídica), y que sea (c) producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes (causalidad material).

A la luz de la jurisprudencia citada anteriormente se puede concluir que el daño antijurídico es el perjuicio que le es generado a una persona y que ésta no tenía el deber jurídico de soportar, razón por la cual le corresponde una indemnización como resultado de un reconocimiento dirigido a lograr su adecuada reparación como consecuencia de una actuación del Estado que no se encuentra justificada, pues existen algunos daños que los asociados sí están en la capacidad y obligación de soportar y por los cuales el Estado no debe responder, por ello, para determinar si un daño es o no antijurídico, deben revisarse en cada caso las circunstancias en las que se produjo el mismo, en especial, la existencia de causales de justificación para la Administración que admitan que la persona, en virtud de normas legales u otros factores, tiene el deber de soportar el daño que se le infringió, según corresponda.

De otra parte, para que se dé la obligación de reparación por parte del Estado, se debe acreditar la existencia de un vínculo jurídico entre el daño y la actividad pública desplegada, de manera que el mismo pueda ser imputable al Estado, por lo que la consecuencia de la ausencia de dicha relación causal, es la imposibilidad jurídica de imputar al Estado y a sus agentes la realización del daño y el reconocimiento de una reparación o indemnización en favor del perjudicado.

Por último, para obtener la indemnización de un daño antijurídico por parte del Estado, se requiere que la lesión sea el resultado de la acción u omisión del Estado, es decir, se excluyen los daños causados por terceros que no tengan relación con el Estado, los producidos por culpa de la víctima y los derivados de fuerza mayor.

Una vez analizada la solicitud de conciliación extrajudicial, se evidencia que no existe razón fáctica o jurídica sobre la cual sustentar una eventual responsabilidad administrativa de la Rama Judicial, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, con ocasión de los hechos ya expuestos, toda vez que dentro del proceso judicial es dable que se ordene la práctica de medidas cautelares sobre bienes objeto de venta, por lo que se observa dentro del proceso adelantado por el Juez 43 Civil Municipal de Bogotá, que las etapas procesales fueron cumplidas, tanto que dicho despacho, decretó la medida cautelar consistente en el embargo y secuestro del automotor la cual se materializó oficiando a la Policía Nacional para que retuviera el vehículo de placas XIB289 y lo pusiera a disposición del Juzgado en los parqueaderos autorizados por el CSJ.

3.3. Inexistencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Del concepto de falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, desarrollado por la ley y la jurisprudencia ya citada, se desprende que las pretensiones alegadas por el demandante tienen relación con la presunta responsabilidad de la parte demandada por los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida del vehículo de placas **XIB289**, afectado con la orden de embargo emanada del Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá.

De acuerdo con la información que registra la página de consulta de procesos, el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá cursa el proceso ordinario con radicado No. 11001400304320140002900, promovido por Jacinto Rodríguez contra Danover Antonio Arce.

El 12 de enero de 2016 se dictó sentencia de primera instancia en la cual se declaró la nulidad absoluta del contrato celebrado entre las partes, ordenándose que el demandado debía restituir al demandante la tenencia del 50% del vehículo de

placas XIB289, decisión que fue confirmada por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá.

Teniendo en cuenta que el demandado guardó silencio ante los requerimientos del despacho para la entrega de la tenencia del vehículo, por auto del 12 de julio de 2017, se ordenó la aprehensión del rodante, el cual fue aprehendido el 26 de febrero de 2016 en Acacías (Meta) y dejándolo a disposición del parqueadero Castilla Real.

Por anterior, el 5 de marzo de 2018 se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a fin de que se investigaran las actuaciones del señor Danover Arce y Fernando Terán, pues indicaron desconocer el paradero del precitado vehículo, empero el rodante fue aprehendido al señor Arce Guapacha, comunicaciones que fueron radicadas el 15 de junio de 2018.

Igualmente se comisiono al Juez civil Municipal de Villavicencio para que proceda a restituir al demandante Jacinto Rodríguez, la tenencia de 50% del vehículo de placas XIB-289, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado 7 Civil Municipal de Villavicencio, estrado judicial al que se le indico en autos del 22 de septiembre de 2018, 05 de marzo de 2019, 27 de junio de 2019, 02 de septiembre de 2019, 06 de noviembre de 2020, 9 de septiembre de 2021 y 15 de junio de 2022 la forma y términos en que debía realizar la comisión.

Al respecto debe señalarse que el demandante ha elevado varias solicitudes con el fin de obtener el registro como propietario del vehículo, pero en múltiples oportunidades el despacho le ha indicado que no es posible modificar lo ordenado en sentencia del 12 de enero de 2016, por cuanto fue confirmada en su totalidad por el ad quem.

De otra parte, en auto del 15 de junio de 2022 se ordenó oficiar al parqueadero Storage Parking SAS, para que indique si conoce el paradero del tracto camión en tanto que fue dejado a su disposición el 26 de agosto de 2013; así mismo se requirió al Parqueadero Castilla Real, para que señale la ubicación del rodante que quedó bajo su custodia el 26 de febrero de 2018.

Observado lo anterior se advierte que los operadores judiciales, en el trámite procesal se apegaron al cumplimiento de las normas vigentes y aplicables para el en cuestión y se evidencia que ha desplegado las actuaciones necesarias para establecer el paradero del vehículo y así darle cumplimiento a lo dispuesto en sentencia del 12 de enero de 2016, esto es, restituir la tenencia del 50% del vehículo en favor del señor Jacinto Rodríguez; luego entonces, las decisiones proferidas dentro del proceso ordinario, se encuentran ajustadas a derecho y ha sido tomadas dentro de un término oportuno y razonable.

Por lo anterior, es viable proponer las excepciones de **falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y hecho de un tercero**, toda vez que la responsabilidad es imputable de manera exclusiva a las actuaciones de los parqueaderos STORAGE AND PARKING SAS y del Parqueadero CASTILLA REAL, que ejercían la custodia del vehículo, por ende, estos son los llamados a responder.

Sumado a lo anterior, dentro de las funciones de las autoridades judiciales no se encuentra la de custodia de vehículos ni la actividad comercial de parqueaderos, por cuanto el parqueadero no forma parte de la estructura de la Rama Judicial, y no existe relación o vínculo contractual alguno entre la Rama Judicial y los parqueaderos STORAGE AND PARKING SAS y CASTILLA REAL, por lo que estos prestan su actividad comercial de manera autónoma, depositando y custodiando vehículos, razón por la cual responden bajo su cuenta y riesgo por todos los daños que se generen con ocasión de la custodia y depósito de los automotores.

3.4. Inexistencia de vínculo contractual alguno entre la Rama Judicial y el Parqueadero

En el caso concreto es preciso tener en cuenta la normatividad vigente al momento de los hechos, que reguló lo relacionado con la conformación del Registro de Parqueaderos a los que debían ser remitidos los automotores inmovilizados objeto de medida cautelar.

En el artículo 167 de la Ley 769 de 2004, Código Nacional de Tránsito, establecía:

“ARTÍCULO 167. VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR ORDEN JUDICIAL. Los vehículos que sean inmovilizados por orden judicial deberán llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial. Las autoridades de tránsito no podrán inmovilizar en los parqueaderos autorizados, vehículos por acciones presuntamente delictuosas”.

En vigencia de la norma anterior, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en su oportunidad, expidió el Acuerdo No. 2586 del 15 de septiembre de 2004, con el fin de regular la conformación anual del Registro de Parqueaderos a nivel nacional a través de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, con el fin de ingresar allí los vehículos que fueran inmovilizados en virtud de una medida cautelar decretada por un Juez de la República.

En cumplimiento de la normatividad anterior, a nivel nacional, los Directores Seccionales realizaban la convocatoria invitando a diferentes parqueaderos para conformar dicho registro anual.

Pero, las Direcciones Seccionales de Administración Judicial en estos casos tan solo emitían una autorización para que ciertos establecimientos comerciales prestaran el servicio de parqueadero para vehículos embargados por orden judicial,

actividad comercial que ejercían bajo su propia cuenta y riesgo, de manera autónoma, depositando y custodiando los vehículos, y para ello se les exigía la constitución de póliza de responsabilidad extracontractual que amparara todas las situaciones fácticas que ocurrieran frente a todos los vehículos que fueran aprehendidos por orden judicial y depositados en los parqueaderos.

Por lo anterior, tal autorización no constituye un vínculo contractual entre la entidad pública y el parqueadero, toda vez que los contratos estatales deben ser solemnes, es decir, siempre debe constar por escrito, tal como lo prevé el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, y en este caso no se celebró contrato alguno, sino que se da una autorización para que los parqueaderos recibieran vehículos embargados por orden judicial y respondieran directamente por su custodia y depósito.

En esta materia, el Juzgado Cincuenta y Nueve (59) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en fallo del veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) dentro del proceso de reparación directa No. 2014-00127, consideró lo siguiente en relación con las actuaciones de la Rama Judicial:

“(…)En ese orden de ideas, y atendiendo a los lineamientos señalados anteriormente por el Despacho, es claro entonces, que dentro del procedimiento de inmovilización, custodia y devolución de un vehículo solicitado por orden judicial, se evidencia la participación de tres actores a saber: i) la Rama Judicial, ii) La Policía Nacional y iii) los establecimientos comerciales destinados y/o registrados para guardar y custodiar los vehículos inmovilizados; dependencias que bajo el marco de sus competencias, tienen asignadas como funciones relacionadas con dicho asunto, las siguientes:

Las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, tienen la obligación de cada año conformar la lista de parqueaderos autorizados para se guarden y custodien los vehículos aprehendidos por orden judicial; a su vez, los señores Jueces de la República, tienen a su cargo la labor de oficiar a la Policía Nacional para que registre y ejecute las medidas cautelares que se profieran en el curso de los procesos judiciales, tendientes al secuestro y captura de automotores; y posteriormente, cuando proceda el levantamiento de las referidas medidas, autorizar nuevamente la movilización de los vehículos aprehendidos; decisión que debe ser notificada a los propietarios de los parqueaderos autorizados, a fin de que éstos últimos procedan a realizar la entrega del bien a la persona que el funcionario judicial señale.

Finalmente, las obligaciones de los propietarios de los parqueaderos autorizados, se circunscriben a la guarda y custodia de dichos vehículos; de ahí que uno de los requisitos para conformar el registro de parqueaderos sea el de suscribir una póliza de seguros que cubra la pérdida y los daños que puedan sufrir los vehículos al interior de dichos establecimientos. Asimismo, el hecho del referido registro conlleva para los parqueaderos, la aceptación de que los automotores que son inmovilizados por orden judicial, están exclusivamente a disposición del Juzgado y por ende es sólo el Juez, quien puede autorizar su movilización a otro lugar.

(…) Ahora bien, en relación con las obligaciones que le asistía a la Policía Nacional para el momento de los hechos, además de acatar la orden impartida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, en relación con la inmovilización del referido automotor, se encontraba la de conducirlo a uno de los parqueaderos autorizados por la Dirección Ejecutiva Seccional

de Bogotá y Cundinamarca; sin embargo debe-destacar esta Sede Judicial que para el año 2005, fecha en la que fue retenido el automotor de placas MLS - 234, no se había conformado el primer registro de parqueaderos autorizados para guardar y custodiar los vehículos objeto de medida cautelar, motivo por el cual los agentes policiales, se encontraban al parecer "en libertad" de trasladar los automotores inmovilizados, a cualquiera de los parqueaderos privados que se encontraran en la ciudad, donde aquellos fueron retenidos.

(...)si bien el automotor de propiedad de la aquí demandante, podía depositarse en cualquier parqueadero ubicado en la ciudad de Bogotá, seguidamente, debía levantarse un Acta de Inventario, donde se consignaran entre el nombre del parqueadero en el que se había depositado el vehículo, el propietario del establecimiento, nombre e identificación de la persona que recibió o y la calidad en la que ésta actuaba, así como la fecha y hora de recibo, identificación e inventario detallado del vehículo y el nombre, Identificación y firma entregaba y de quien recibía; documento éste que debía remitirse a la que ordenó la medida de embargo, a más tardar el día hábil siguiente. Sin embargo, dichas obligaciones no se cumplieron a cabalidad por los agentes policiales.

(...) Bajo ese entendido, es claro que en relación con la función que en este caso, le compete a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el Despacho no se evidencia incumplimiento alguno por parte de la misma, por cuanto a la fecha de la inmovilización del vehículo de placas MLS - 234, esto es para día 25 de enero de 2005, no se había conformado el primer registro parqueaderos autorizados. No obstante, vale la pena resaltar que aún en el que para el año 2005, se hubiere conformado registro de parqueaderos, de conformidad con el Acuerdo No. 2586 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, dicho registro se elabora con los establecimientos comerciales que han acreditado ante la Dirección Ejecutiva Seccional, los requisitos establecidos en la mencionada disposición normativa para su funcionamiento. **Evento éste, del que no puede derivarse una relación directa o vínculo contractual alguno frente a la Dirección Ejecutiva seccional de Administración Judicial de Bogotá** en este caso, tendiente a ejercer algún tipo de control frente a este tipo de establecimientos comerciales, como quiera que precisamente una de las exigencias que establecen dichos acuerdos, para ser integrantes del registro, es la de suscribir una póliza de seguro, que ampare las posibles contingencias que se presenten con los referidos bienes.

(...)De acuerdo con lo anterior, pese a que algunas de las omisiones en que incurrió el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, sean reprochables por parte de éste Despacho, como quiera que su actuar no fue eficaz en el curso del proceso de restitución de bien mueble No. 2002-1546 que estuvo a su-cargo; **dichas omisiones no determinaron fehacientemente la causación del daño que aquí se alega, toda vez que como se refirió anteriormente, la custodia del vehículo se encontraba a cargo de un tercero - Parqueadero Granada- quien debe responder por el incumplimiento de sus obligaciones que a la postre, condujo a la pérdida del automotor que se encontraba en sus instalaciones,** más aún si se tiene en cuenta que desde antes de que se prohiriera sentencia de primera instancia que ordenara la entrega del automotor a la aquí demandante, el bien ya había sido retirado de dicho establecimiento, como lo puso de presente ante el Juzgado, el apoderado de la señora Edna González, a través de escrito de fecha 10 de agosto de 2006.

Por consiguiente, advierte este Despacho que pese a que el Establecimiento Comercial "Granada", no fue vinculado al proceso que nos ocupa, se ordenará COMPULSAR copias de las presentes diligencias con destino a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que investigue una posible conducta sancionable del Representante Legal de dicho Establecimiento, por la pérdida y/o no devolución del automotor de placas MLS - 234, a la

señora Edna Maritza González Velandia, el cual fue dejado a su disposición el día 25 de enero de 2005, en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá.

(...)Por todo lo anterior, concluye esta Sede Judicial que no puede atribuírsele responsabilidad a las aquí, demandadas, al no encontrar configurados los presupuestos establecidos para tener por acreditada la falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como quiera que tal y como quedó establecido a lo largo de esta sentencia, y pese a evidenciarse omisiones de las demandadas, en el desarrollo de las actuaciones que aquí se han descrito, **aquellas no fueron determinantes ni concluyentes, en la consolidación del daño que** ; aquí se alega, esto es, en la pérdida del automotor de propiedad de la demandante. **Ello, toda vez, que la guarda y custodia del vehículo de placas MLS -234 de propiedad de la señora Edna Maritza González Velandia, se encontraba a cargo del Establecimiento Comercial "Granada", motivo por el cual se negarán las pretensiones de la demanda, por las razones antes señaladas.**"

Y en el mismo sentido se pronunció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca² que, en providencia del 21 de mayo de 2021, a través de la cual resolvió una solicitud de medida cautelar dentro de un caso similar, señaló que no está probada la relación contractual entre el parqueadero y la Rama Judicial:

*"Entonces, la discusión judicial que actualmente se cierne sobre el retiro de los vehículos que se encuentran en el predio ya mencionados, desdibujan la evidencia de la existencia del derecho que se alega en la demanda, por lo que no se cumple con el fumus bonu iuris, necesario para la prosperidad de la medida cautelar. Adicionalmente, la negativa a decretar la medida solicitada no comporta ningún agravio para el interés público, **máxime cuando el debate recae sobre el incumplimiento contractual entre dos privados**, en donde se alega la participación de la Rama Judicial, sin embargo, con los elementos probatorios que obran en el plenario no se pudo corroborar que los vehículos que están en el predio, se encuentren en virtud de una orden judicial, tampoco fue posible establecer la titularidad del derecho de la parte actora, **y no se logró acreditar el vínculo directo entre la sociedad BU STORAGE AND PARKING y la Rama judicial**, porque, si bien en la subsanación de la demanda anexan la Circular DESAJC16DS-2 de ocho (8) de enero de dos mil dieciséis (2016) y se indica que la mencionada sociedad se encuentra en el registro de parqueaderos autorizados para ese año, lo cierto es que no se logró acreditar que los vehículos presuntamente abandonados sean por orden judicial."*

Conforme lo anterior, en el presente caso no hay lugar a imputar responsabilidad a la Rama Judicial, puesto que, en primer lugar, no está dentro de sus funciones la actividad comercial de custodia de vehículos, así mismo no existe relación contractual alguna entre la Rama y los parqueaderos STORAGE AND PARKING SAS y CASTILLA REAL , de existir omisión por parte del Juez, ésta no fue determinante en el daño, en la medida en que fue la omisión de los parqueaderos en cumplir con su función de custodia como depositarios del vehículo fue la que dio lugar al daño alegado.

² Sección Tercera Subsección B, Magistrada Ponente Clara Cecilia Vargas Suárez, Expediente 25000233600020200001100, Magistrada Ponente Clara Cecilia Vargas Suárez

En este orden de ideas, el resultado dañoso, es imputable a la conducta desplegada por los propietarios o administradores de los parqueaderos STORAGE AND PARKING SAS y CASTILLA REAL, y no a la Rama Judicial, de allí que se diga desde ya, que se presenta carencia absoluta de responsabilidad por parte de la Rama Judicial, por ausencia de nexo causal al configurarse el **hecho de un tercero**.

El hecho de un tercero ha sido definido por el Consejo de Estado, de la siguiente forma:

“En relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél, de manera que se produce la ruptura del nexo causal; además, como ocurre tratándose de cualquier causa extraña, se ha sostenido que la misma debe revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad, más allá de la consideración de acuerdo con la cual ha de tratarse de una conducta ajena a la de la entidad pública demandada. Adicionalmente, no puede perderse de vista que para que el hecho del tercero pueda ser admitido como eximente de responsabilidad no se precisa a que sea culposo sino que constituya la causa exclusiva del daño³.” (Subrayas propias).

La misma corporación, en reciente fallo, ha determinado los elementos que configuran su existencia como eximente de responsabilidad estatal, siendo estos, los siguientes:

“Se destaca en particular, para los efectos de esta providencia, que el hecho del tercero será causa extraña que exonere de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúna los siguientes requisitos: (i) Que el hecho del tercero sea la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurren en la producción del daño existiría solidaridad entre éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le dará derecho a éste para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención. (ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado. (iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”⁴.

³ Expediente 25000-23-26-000-1993-09409-01(16927). M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 25 de febrero de 2009.

⁴ Expediente 25000-23-26-000-1998-00668-01(19287). M.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 18 de marzo de 2010.

En ese orden de ideas, se presenta la **falta de legitimación en la causa por pasiva** de la Rama Judicial, ya que no se cumplen los presupuestos para que se declare su responsabilidad, en razón a que se encuentra plenamente acreditada la causal eximente de responsabilidad del **hecho de un tercero** y cualquier daño causado a la convocante resultaría imputable a los propietarios o administradores de los parqueaderos STORAGE AND PARKING SAS y CASTILLA REAL.

Sin embargo, en este punto es importante precisar que, una vez verificada la fecha del acaecimiento del hecho dañoso, se advierte que el término otorgado por la ley para iniciar la acción de reparación directa ha caducado como seguidamente se procede a explicar:

3.5. De la caducidad del medio de control de reparación directa

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fija las reglas de caducidad de las acciones o medios de control, y respecto a la reparación directa, dispone:

“ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...)

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...)”

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que, quien pretenda hacer uso del medio de control de reparación directa, cuenta con un término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La Sección Tercera del H⁵. Consejo de Estado en reciente pronunciamiento reiteró que:

“El fenómeno de la caducidad de la acción es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunas acciones contenciosas por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio de la acción.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2019, radicado 2012-00088-01 (59029) M.P. Ramiro Pazos Guerrero

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones consolidadas. (...)"

En los casos en los cuales se ejerce el medio de control de reparación directa aduciendo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la jurisprudencia del Consejo de Estado es pacífica y coherente en que, por regla general, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe iniciarse a partir del momento en que adquirió firmeza la decisión judicial, así:

*"La acción de reparación directa con fundamento en el error judicial o en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contado a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial"*⁶.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia sólo puede empezar a contarse cuando está en firme la providencia o cuando se tiene pleno conocimiento de las actuaciones u omisiones que se constituyen en fuente de daño; sea una providencia judicial, o simples trámites secretariales o administrativos propios de la administración de justicia.

De lo expuesto normativa y jurisprudencialmente, se evidencia que en el presente caso se ha materializado la caducidad del medio de control de reparación directa, en la medida en que han transcurrido más de dos (2) años desde la fecha en que el convocante manifestó tener conocimiento de la pérdida de su vehículo, como se indica en las providencias del 13 de julio de 2016 y 7 de febrero de 2017, por lo que el término para presentar la demanda vencía en el mes de febrero de 2019, sin embargo, como el interesado radicó la solicitud de conciliación solo hasta el 2 de mayo de 2023, en el presente caso puede predicarse la ocurrencia del fenómeno jurídico de la caducidad, por consiguiente, en este caso no es posible presentar formula conciliatoria alguna

En ese orden de ideas, se presenta la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA** de la Rama Judicial, ya que no se cumplen los presupuestos para que se declare su responsabilidad, en razón a que se encuentra plenamente acreditada la causal eximente de responsabilidad del HECHO DE UN TERCERO y cualquier daño causado a la demandante resultaría imputable a STORAGE AND PARKING SAS y CASTILLA REAL.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

IV. EXCEPCIONES.

1.- INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO: Así mismo, considero que no se dan los presupuestos para que se estructure la responsabilidad a cargo de la Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que las actuaciones esgrimidas por el despacho judicial que conoció del proceso ejecutivo dentro del cual los demandantes fungían como demandados, se ajustaron a la normatividad sustancial y procedimental vigente, aplicable para los procesos ejecutivos y dentro de sus funciones no se encuentran las de custodia o conminación a los propietarios de los parqueaderos donde se encuentran los vehículos embargados, para el cumplimiento de sus funciones, pues no existe relación contractual alguna entre éstos y la Rama Judicial.

2.- AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA EXISTENCIA DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: Toda vez que no se dan los presupuestos para que se estructure la responsabilidad a cargo de la Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que, las actuaciones efectuadas por el Juzgado que conoció del proceso judicial dentro del cual se ordenó el embargo y retención del vehículo se ajustaron a la normatividad sustancial y procedimental vigente, aplicable en materia de medidas cautelares para el caso sub- lite, como lo fue el decretar bajo las normas y procedimientos vigentes las respectivas medidas cautelares, la cancelación de las mismas y atender las peticiones elevadas por la demandante.

3.- HECHO DE UN TERCERO: Además de lo anterior, en el caso sub examine se encuentra plenamente acreditada la causal eximente de responsabilidad denominada “HECHO DE UN TERCERO”, consistente en la conducta desplegada por STORAGE AND PARKING SAS y CASTILLA REAL, lo que fue determinante de que se configurara la pérdida del vehículo objeto de cautela.

4.- LA INNOMINADA. De conformidad con el Artículo 187, inciso 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito se declare cualquier otra que el fallador encuentre probada en el curso del proceso.

V. PRUEBAS.

Solicito a la señora Juez, decretar las pruebas que considere pertinentes para determinar la existencia o no del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado.

VI. PETICIONES

En ese orden e ideas, no se cumplen los presupuestos para que se declare la responsabilidad administrativa que se pregona en el presente asunto, respecto de la RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, en razón a que se encuentra plenamente acreditada las causales eximentes de responsabilidad **HECHO DE UN TERCERO INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA EXISTENCIA DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA y LA INNOMINADA**

Siendo lo anterior así, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que los demandantes alegan su injusticia, no se configura en el presente asunto, lo cual se desprende del análisis tanto del escrito demandatorio, como de las diferentes pruebas arrojadas al expediente y por tanto solicito a la señora Juez, despachar desfavorablemente las suplicas de la presente acción, eximiendo de responsabilidad a la entidad que representó y declarando probadas las excepciones planteadas.

VII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Frente a la estimación razonada de los perjuicios que hace la parte actora, me permito objetarla, toda vez que no allega prueba siquiera sumaria de los mismos.

Y, en todo caso debe probarse la existencia de los perjuicios ocasionados, entre ellos el lucro cesante.

VIII. FUNDAMENTOS JURIDICOS

- Artículos 65, 67, 69, 98 y 99 Ley 270/96 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
- Artículo 90 de la Constitución Política.

IX. NOTIFICACIONES

De las decisiones que se profieran en la presente actuación judicial podrá notificarme en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Unidad de Asistencia Legal, en la Carrera 7ª No 27 – 18, Teléfono 5553939, ext. 1078. Correo

electrónico de notificaciones DEAJ: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co Correo institucional: jrugelef@deaj.ramajudicial.gov.co

.- Al demandante y a su apoderado en las direcciones que obran en el proceso.

De la Señora Juez, atentamente,

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'Javier Rugeles'.

JAVIER RUGELES FONSECA
C.C. No. 79.372.166 de Bogotá
T.P. No. 143.937 del C.S. de la J.